

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas
CAUSA ROL : C-1232-2021
CARATULADO : ANTINOPAI/FISCO DE CHILE

Punta Arenas, veinte de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que, en el folio 1, Oscar Gibbons Munizaga, abogado, domiciliado en calle Manuel Señoret N° 142, Punta Arenas, actuando como mandatario judicial de doña Olga Antinopai Sánchez, labores del hogar, de su mismo domicilio para estos efectos, interpone demanda ordinaria en juicio de hacienda, para la indemnización de los perjuicios por daño moral sufridos por su representada, en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado en nuestra Región por el Procurador Fiscal en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, don Claudio Benavides Castillo, abogado, ambos domiciliados en calle 21 de Mayo N° 1678, Punta Arenas, sobre la base de las siguientes consideraciones.

Pide al tribunal, tener por interpuesta demanda, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar por el daño moral sufrido, la suma de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) o la suma o cantidad que este tribunal estime de Justicia conceder conforme al mérito del proceso, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

Señala que el cónyuge de la demandante, don Miguel Ángel Velásquez Guerrero fue secuestrado por agentes del Estado, torturado, física y psicológicamente por agentes estatales en Magallanes, retenido en un centro de prisión clandestino, fue impedido de ejercer sus labores como trabajador de estancia, por el Ejército de Chile y sometido ilegalmente a una extensa libertad vigilada.

Cita lo señalado en el Capítulo VI el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Recintos de Detención, Magallanes, páginas 419 a 428.

Indica que el cónyuge de la demandante fue reconocido por el Estado de Chile como víctima directa de violaciones a los derechos humanos, siendo individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el D.S. N° 1040 de 2003, del Ministerio del Interior.

Menciona que en circunstancias que el cónyuge de la demandante se desempeñaba como trabajador de la “Estancia Primavera”, ubicada en la comuna de Tierra del Fuego que hoy tiene ese mismo nombre, el día 25 de septiembre de 1973, es secuestrado ilegalmente por una patrulla militar, siendo subido a un camión del Ejército de Chile, en el cual lo desnudan y es golpeado repetidamente con culatas de fusil, con manos y pies.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LTKYXFEBTSJ

Dice que, al cabo de algunas horas de maltrato físico y emocional, los militares lo llevan a la casa de interrogación que instalaron en Cerro Sombrero, perteneciente a la Empresa Nacional del Petróleo, recinto que estaba a cargo del Ejército de Chile, siendo comandado por un mayor de ejército de apellido López, secundado por un teniente de la misma institución de apellido Mercado. Tan pronto lo ingresaron allí, lo torturaron con una “ceremonia” que denominaban “la alfombra”, que consistía en arrojarlo al suelo y con golpes de pies, pisotones y culatazos, siendo agredido por toda la guardia de turno, conformada por aproximadamente 8 personas, debido a la golpiza resulta lesiones que, según le relató a su cónyuge posteriormente, no puede identificar, pero le duraron varios días, sin que durante ellos recibiera algún tipo de atención médica.

Agrega que el cónyuge de la demandante le contó que luego fue llevado a una “casa de detención”, donde es interrogado y torturado por tres días seguidos, preguntándole acerca de donde escondía las armas, las que por supuesto no tenía y acerca de un plan subversivo del Partido Comunista denominado plan Z, del que no tenía conocimiento alguno. Las torturas, según le narró a la demandante, consistían en golpes de puños y pies en la cabeza, sumergirlo de cabeza en tambores metálicos llenos de agua con olor a fecas humanas. Además, lo colgaban por horas de los pies y le tiraban bombas lacrimógenas y agua, lo que hacía que todo su cuerpo sintiera el efecto de los químicos. Le aplicaron repetidas cargas eléctricas en los testículos y sienes, todo ello sucedía mientras estaba completamente desnudo. También fue inyectado repetidamente con una “droga de la verdad”, como le decían sus torturadores, a fin de obligarlo a entregar de ese modo las respuestas que buscaban, señalándole que era un mentiroso y ahora sí entregaría la información.

Expresa que durante el tiempo que estuvo allí, su alimentación era escasa y de mala calidad, al desayuno le daban café y pan; algunos días le dieron como almuerzo porotos con pan y algunos días le dieron por cena otras legumbres o fideos.

Señala que permanece detenido hasta fines de octubre de 1973, siendo informado por sus captores que su libertad sólo sería transitoria y lo volverían a buscar, estando obligado en el intertanto a firmar diariamente en la comisaría de carabineros de Cerro Sombrero, lo que dura por un periodo de 2 años y algunos meses.

Indica que la demandante hace lo posible por buscar ayuda médica para paliar las secuelas físicas que incluyen hipertensión arterial, desnutrición y problemas cardíacos, además de las psicológicas que incluyen delirio de persecución, nerviosismo, pesadillas e insomnio e irritabilidad, secuelas que puede en general mitigar con el paso de los años, pero que de alguna forma lo afectaron hasta el día de su muerte.



Dice que el registro como víctima de prisión política y tortura del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, del cónyuge de la demandante, es el N° 25.824.

OTROS FUNDAMENTOS DE HECHO FUNDANTES DEL DERECHO A DEMANDAR DAÑO MORAL POR LA DEMANDANTE:

Además, indica que como fundamentos de hecho que sustentan una indemnización de daño moral, se encuentra el hecho de que además de los daños físicos y materiales que sufrió su cónyuge, se encuentra un daño moral directo derivado de a lo menos, las siguientes circunstancias que rodearon el hecho fundamental del Golpe de Estado y que en le afectaron en su caso particular: a) Daño Mental; b) Amenazas; c) Incomunicación; d) Persecuciones; e) Exoneración Laboral; f) Negativa de acceso a la información; g) Inseguridad; h) Presiones y daños psicológicos; i) Alteraciones del sueño; j) Neurosis de angustia, con secuelas de enfermedades psicosomáticas; k) Aislamiento Social; l) Pérdida de oportunidades, en particular de empleo, educación y prestaciones sociales; m) Otras secuelas en el seno de la familia, como separaciones forzosas de largo tiempo; sufrimiento de sus hijos, quienes también fueron afectados en sus Derechos Humanos conculcados en toda su amplitud, incluyendo la oportunidad de los derechos superiores del niño y adolescentes; daños que permanecen incólumes pese al transcurso del tiempo. Toda esta aflicción respecto de la compareciente se entendió durante toda su vida sentimental con el señor Velásquez Guerrero y las consecuencias de la experiencia vivida, los temores, sobresaltos y sufrimientos instalados en el seno familiar le acompañaron hasta su deceso y se han proyectado hasta el día de hoy en un tiempo en que la nostalgia y el daño causado ya forma parte, indefectiblemente se su vida cotidiana.

EL DERECHO:

Señala que en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales o Convención Europea de 1950 , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (suscrito por Chile y Los artículos 1, 3, 13, 17, 49 y 50 del Convenio I; los artículos 12, 13, 14, 17, 22, 91, 92 del Convenio II; en nuestra Constitución el artículo 19; los artículos 3, 5, 9, 11, 13/1, 13/2 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 6, 7, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 4, 5/1, 5/2 y 7 del Pacto San José de Costa Rica y artículo I de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad, fueron sistemáticamente violados en las personas de los demandantes, por el Estado de Chile y sus agentes.

En lo que respecta al daño moral y a su reparación, estas violaciones fueron sistemáticamente ejecutadas por órganos estatales en el cumplimiento de una política terrorista del Estado, lo que produjo un considerable, indeleble, profundo, extenso y



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LTKYXFEBTSJ

perdurable daño moral que marcó para siempre sus vidas, que les privó de libertad, de la compañía de sus familias, de sus amigos, de sus compatriotas, de su Patria, del goce de una existencia plena, libre de asechanzas, de peligros, de riesgos, libre de escuadrones de la muerte o de comandos conjuntos, de esbirros de la DINA o CNI, de militares y marinos destruyendo sus vidas.

En el caso de la demandante y en general de todas la cónyuges de víctimas de violaciones de derechos humanos desde septiembre de 1973, la lesión o violación de los derechos de las víctimas ha ocurrido en el plano de los derechos fundamentales de las personas, inherentes e inseparables de su condición humana. En principio todo daño moral debe ser reparado, requiriendo el daño moral, que la reparación sea una indemnización que proporcione las bases para obtener goces equivalentes que compensan la pérdida, el dolor, el sufrimiento, la aflicción y el pesar, conforme a lo dicho en el Capítulo IX del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2005) al referirse a los fundamentos de la reparación.

Conforme al artículo 63.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos, no es materia de discusión el hecho de que los estados están obligados a reparar a las víctimas directas e indirectas de violaciones de derechos humanos, es un principio del derecho internacional público y una norma acogida por el sistema convencional, tanto universal como regional.

Esta demanda se basa además en los artículos 5º inciso 2º, 6º, 7º, 19º y 38 inciso 2º de la Constitución Política de Chile, el artículo 4º de la Ley 18.575 y el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

Además, de conformidad las normas civiles chilenas, artículos 2314 y siguientes del código civil, que a la postre constituyen hoy un principio jurídico, más que una norma positiva, que cristaliza las prácticas internacionales en el sentido que todo daño producido por violación de derechos humanos debe ser pagado en forma íntegra, completa y total, configurándose una norma hoy, imposible de desconocer, de *jus cogens*.

LA ACCIÓN INCOADA ES IMPRESCRIPTIBLE:

Expresa que esta doctrina ha mantenido la Excma Corte Suprema, tal como se señala en su fallo recaído en causa Ingreso N°4024-2013: “En efecto, tratándose de delitos de lesa humanidad, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos -integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del artículo 5º de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito”.



REPARACIÓN PREVIA DEL ESTADO ES INSUFICIENTE:

Menciona que la Ley N°19.992 estableció algunas prestaciones para víctimas de violaciones de derechos humanos, entre los cuales se encuentran la actora, pero estos beneficios no pueden ser considerados una completa indemnización de sus perjuicios, sino que es un gesto del Estado de Chile para aquellos que se vieron gravemente perjudicados por actos ejecutados por agentes del Estado, en el periodo posterior al 11 de septiembre de 1973.

Dice que como señaló la Excma. Corte Suprema en una causa similar: “En lo que concierne a la excepción de pago, basada en que los actores son beneficiarios de la Ley N° 19.992 y por haber obtenido otras prestaciones, expresa la resolución que con esa alegación el Fisco reconoce en la situación concreta una necesidad de reparación y, como corolario, un deterioro. Efectivamente, tal como lo afirma el demandado, se han efectuado por el Estado chileno variados esfuerzos, una vez finalizado el régimen autoritario, de compensación de los perjuicios, mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos comprometidos en similares apremios de los actores, reparaciones que han tenido un carácter general en procura de una solución uniforme y circunstancias específicas y peculiares de cada ser humano víctima de coerciones ilegítimas en dicho período. Los dineros suministrados por estos conceptos no encuadran en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una justa retribución a los lesionados, cantidades que, a juicio del tribunal, no se compadecen con la normativa internacional mencionada.” (Considerando segundo sentencia en recurso de casación interpuesto por el Fisco de Chile, Rol N° 1092-15).

Dicha sentencia ahonda más en el tema en su considerando noveno: “Que estas consideraciones impiden admitir la improcedencia de la compensación alegada por el Fisco, en virtud de las pensiones de reparación con arreglo a la ley N° 19.992, obtenidas por los demandantes, porque semejante planteamiento resulta inconciliable con la preceptiva internacional detallada y porque el derecho común interno sólo cobra fuerza cuando no la contradice, como también se señaló, en vista de lo cual la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos siempre queda sujeta a las reglas de Derecho Internacional sobre derechos fundamentales de las personas, las que no pueden ser incumplidas en función de otras imposiciones legales de derecho patrio.

Agrega que bajo este prisma la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que fue diseñada para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades de compensación y que las asuma el Estado voluntariamente en su totalidad, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por lo medios que franquea la ley.”



PERJUICIOS DEMANDADOS:

Señala que en la representación que inviste, solicita que, al acoger la presente demanda, se indemnice por la demandada a la demandante, en la suma de \$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos), por el daño moral que sufrió producto de los hechos descritos en la presente demanda.

Agrega que tal como señalara la I. Corte de Apelaciones de Santiago en una causa previa, rol 52702013: “Si bien es cierto que el daño moral debe ser acreditado, debe tenerse presente que no puede existir duda que las víctimas de violaciones de derechos fundamentales, en particular los actores, que fueron reclusos ilegalmente en una isla del fin del mundo; que sufrieron maltratos y que vivieron en aquel período la agonía de la incertidumbre de su propia existencia, sufrieron un inconmensurable daño moral, que no requiere ser probado pues el más elemental sentido común basta para tal efecto”.

Por tanto, conforme además con lo dispuesto en el artículo 253 y siguientes, en relación con los artículos 748 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil, solicita tener por interpuesta demanda ordinaria en juicio de hacienda, de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, representado por don Claudio Benavides Castillo, ambos ya individualizados, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar una indemnización por el daño moral sufrido, ascendente a \$150.000.000.-, (ciento cincuenta millones de pesos) a la demandante que representa, individualizada supra, o la suma o cantidad que este tribunal estime de Justicia conceder conforme al mérito del proceso, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

Que, en el folio 14, la demandada contestó la demanda.

Que, en el folio 16, la demandante evacuó la réplica.

Que, en el folio 18, la demandada evacuó la duplica.

Que, en el folio 22, se recibió la causa a prueba.

Que, en el folio 55, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

La Constitución Política de la República. Que, como señala el profesor Carlos Nino, refiriéndose a Hart, la Constitución es posible verla como el conjunto de prácticas de reconocimiento del derecho de una sociedad –es decir, no sólo opera como un evento que se origina por una convención social, sino que representa una práctica social continua-.

Así, es posible observar a la Constitución Política de la República como un instrumento que sirve para resolver problemas de coordinación, como ocurre en el presente caso, en el cual por una parte se demanda la indemnización de perjuicios a causa de un hecho dañoso, y por otro, la existencia de la institución de prescripción –vigente en nuestro orden jurídico- lo que da certeza a sus ciudadanos –y no sólo a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LTKYXFEBTSJ

ellos pero a ellos principalmente- no sólo sobre la exigibilidad sino también de la oportunidad de tal exigibilidad.

Sostiene lo anterior, lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, el que mandata la incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Conviene tener presente para efectos de consideraciones previas, que el sujeto, la persona humana, se ha erigido como el centro de generación del derecho, de manera tal que son sus intereses el principal objeto de protección de parte importante de las normas jurídicas.

Como se viene reflexionando y considerando la relevancia en el proceso de construcción de normas, y específicamente de lo que debemos entender por derecho vigente, el Máximo Tribunal ha transitado en lo que respecta a dar lugar a la reparación civil por responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos, decidiendo de esta manera preterir la prescripción establecida para casos que no operan como éste, en el extremo, y hoy en día parece estar conteste en la necesidad de dar lugar con determinados matices.

Por su parte, el acceso a la justicia en su amplia dimensión y reparación integral a las víctimas. Ha sido, en nuestra región, la Corte IDH la que ha relevado la importancia de estos derechos, convirtiéndolo en un elemento central de nuestros ordenamientos jurídicos, ampliando su entendimiento –respecto de acceso a la justicia- no sólo a exigencias adjetivas sino a su sentido material, todo en el marco de lo que entendemos, es un Estado de Derecho.

Obliga lo anterior, que frente a la interpretación de normas, el sentenciador debe optar por aquella que haga efectivo los derechos y garantías de los ciudadanos, que efectivamente constituya un acceso a la justicia en su amplia dimensión. Así las cosas, y como lo ha señalado esta Corte internacional, “el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones...” por una parte, y por otra, pone acento en la víctima, como un actor central en el derecho internacional de los derechos humanos. Por su parte, la reparación integral comprende la investigación; restitución de derechos, bienes y libertades; la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción de la víctima; las garantías de no repetición; y las indemnizaciones compensatorias por daños materiales e inmateriales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el folio 1, Oscar Gibbons Munizaga, abogado, domiciliado en calle Manuel Señoret N° 142, Punta Arenas, actuando como mandatario judicial de doña Olga Antinopai Sánchez, interpuso demanda ordinaria en juicio de hacienda, para la indemnización de los perjuicios por daño moral sufridos por su representada, en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LTKYXFEBTSJ

derecho público, representado en nuestra Región por el Procurador Fiscal en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, don Claudio Benavides Castillo, por las razones de hecho y derecho señaladas en la parte expositiva, las que se dan por expresamente reproducidas por economía procesal.

SEGUNDO: Que, en el folio 14, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone, con costas, o en subsidio, rebajar los montos indemnizatorios.

La parte demandada, esto es, el Fisco de Chile, sin discutir los hechos en lo que se basa la demandada, estando conteste en que estarían reconocidos por el Estado (e incluso alega, reparados).

Señala que la Sra. Olga Antinopai Sánchez, en la actualidad es beneficiaria de una pensión de viudez conforme lo dispuesto en la ley N°20.405, en su condición de cónyuge sobreviviente de víctima de Prisión Política y Tortura, don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, y que, en efecto, don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, recibió pensión de reparación en su condición de víctima de Prisión Política y Tortura, conforme lo dispuesto en la ley N°19.992, hasta su fallecimiento, ocurrido con fecha 20 de julio de 2013, luego de lo cual la demandante ha percibido una pensión derivada de su condición de cónyuge.

Agrega que, como consecuencia de lo antes indicado, la demandante de autos no puede pretender ser indemnizada por los daños propios de su cónyuge fallecido, por el contrario, debe limitar su pretensión de daño y la prueba de los mismos, a su propia e individual afectación, circunstancia que no aparece descrita en los términos expuestos en la demanda de autos.

El Fisco de Chile solicita el rechazo de la demanda, básicamente por estimar la prescripción de la acción por un lado, así como por otro, por estar en todo caso ya indemnizado en sus perjuicios la víctima, al ser parte de un programa estatal de reparación, recibiendo los beneficios que diversas leyes de reparación han establecido en su favor, como lo reconoce en la demanda, a consecuencia del reconocimiento que se les hace por la Comisión Nacional sobre prisión y tortura, creada por el D.S. N° 1040 de 2003, del Ministerio del Interior, señalando en subsidio, que el monto debe en todo caso ser muy inferior al demandado, toda vez que se explicitan los montos que el Estado ha desembolsado en diversas formas de reparación.

TERCERO: Que, en el folio 16, la demandante evacuó la réplica.

Expresa que la contraparte señala en la contestación de la demanda, que la actora no hace descripción de su propia afectación, sin embargo, en la página 12 de la demanda indica cuáles son los daños ocasionados a la actora y que dicen relación con aquellos hechos que afectaron a su ex cónyuge y que igualmente produjeron profundo dolor en ella. Aclara que no se ha accionado en representación de don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, o por ser la demandante su Heredera, sino que por derecho propio de ella, en virtud del enorme daño moral personalmente sufrido,



producto de las graves violaciones a los Derechos Humanos sufridas por su cónyuge de entonces.

En cuanto a la prescripción extintiva, solicita el rechazo de esta excepción, en definitiva, reiterando para ello los argumentos contenidos en la demanda. Por lo demás, la jurisprudencia citada en esta excepción es ya “antigua” tiene más de ocho años de antigüedad, habiendo sido sustituida por una visión moderna de justicia, conforme a lo cual no puede prescribir el derecho de indemnización de una víctima de violaciones de derechos humanos, en particular si provienen de acciones de agentes del estado, no sólo por el hecho de que quienes estaban obligados a protegerlos los dañaron profundamente, sino como un modo de prevenir que estos hechos se sigan repitiendo en nuestra historia futura.

Agrega que en subsidio de las alegaciones precedentes de controversia de los hechos y prescripción, la regulación de daño moral debe considerar los pagos recibidos del estado como exonerado político por su cónyuge y por ella como cónyuge sobreviviente y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales, solicita el rechazo de esta postura de la demandada, toda vez que los beneficios de la Ley N°19.992, no son compensables con la justa indemnización del daño moral que merecen las víctimas de violaciones de derechos humanos. En cuanto al que el monto de la indemnización guarde armonía con montos establecidos por otros tribunales, no tiene ningún asidero legal, porque cada proceso debe fallarse conforme a su mérito, siendo libre el Juez de cualquier influencia de fallos anteriores. Por lo demás, las indemnizaciones fijadas en fallos pretéritos no son armónicas, variando desde unos míseros 3 millones de pesos por cada víctima, en el más exiguo de estos fallos, hasta 200 millones por víctima, en el más cercano a un monto que implique una real reparación, para quienes padecieron tantos sufrimientos a manos de agentes del estado.

CUARTO: Que, en el folio 18, la demandada evacuó la dúplica, señalando al efecto que reproduce íntegramente y ratifica en su totalidad el escrito de contestación de la demanda de fecha 13 de octubre de 2021, por lo que se reiteran todas y cada una de las alegaciones, excepciones y defensas contenidas en dicho escrito.

Sin perjuicio, en relación a la excepción de reparación integral opuesta, reitera lo señalado en la contestación de la demanda, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por la demandante cónyuge de la víctima, ya sea en forma de transferencias directas en dinero bajo la forma de pensión de viudedad, por cuyo concepto ha cobrado desde el fallecimiento del Sr.



Velásquez Guerrero a la fecha la suma de \$15.413.584.-, y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

Destaca que la actora en su escrito de réplica señala que acciona por el “enorme daño moral personalmente sufrido producto de las graves violaciones a los DDHH sufridas por su cónyuge de entonces”, sin referir que los hechos que señala como vulneratorios a los DDHH se verificaron entre el mes de septiembre y el mes de octubre de 1973, época en que Olga Antinopai no era cónyuge de la víctima, pues dicha unión data de fecha 07 de diciembre de 2009 y hasta el año 2013 en que ocurrió el deceso del Sr. Velásquez Guerrero.

En relación a la prescripción de la acción deducida en este juicio, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que transcribió en sus principales argumentos, en el escrito de contestación a la demanda. En dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código 22 Civil.

Dice que, en efecto, desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado.

Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Indica que también la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, respecto a la excepción de pago y de prescripción.

Finalmente, hace presente que el demandante ha recibido la suma total de \$15.398.457.- y que mantiene, además, una pensión mensual denominada “Valech” de \$170.728.-

QUINTO: Que la demandante, a objeto de acreditar su pretensión, rindió la siguiente prueba:

Testimonial: Que en el folio 53, rindió la de doña **Ninen Idilia De Lourdes Gómez Villegas**, quien señala que cree que es efectivo que el Estado de Chile, a



través de sus agentes, ejecutó los actos y/o incurrió en las omisiones, descritos en la demanda, dice que sabe algo de eso. Ella conocía a don Miguel Velásquez el año 1995 y de ahí empezó a tratar con ellos, con la familia desde ese año en adelante, hubo un buen vínculo con don Miguel, era una buena persona y al poco tiempo se empezó a enfermar de la próstata y se transformó en un cáncer que lo llevó al fallecimiento. En el intertanto conversando y compartiendo con él muchas veces en su casa, les comentaba todo lo que le había sucedido cuando fue detenido y lo que él había pasado, las torturas, los golpes, que derivaron en algunas enfermedades posteriores, ya que él tenía lesiones internas, lo que está corroborado con los médicos que lo atendieron. Sobre todo en la parte baja del vientre, a parte oídos y cabeza, que sin motivo ni razón los sacaban y los golpeaban, de preferencia en las noches, les tiraban agua, los manguereaban, lo que derivó en todas las enfermedades que después sufrió. De ahí hubo un proceso largo de cotas enfermedades, por el tema del cáncer sobre todo, fue tratado acá en Punta Arenas, a él le sacaron partes de su cuerpo y le hicieron un injerto, pero nada resultó y de ahí lo derivaron a una Clínica en Viña del Mar, igual falleció, aunque se hizo todo lo posible, ya que como él tenía buena situación económica, pudieron hacer todo lo que estaba su alcance, pero igual falleció; explica que por lo que tiene entendido, porque no le consta, solo por lo conversado, los actos y omisiones que ejecutaron los Agentes del Estado en contra del Sr. Velásquez, alguno de ellos tiene entendido fue en un recinto militar, por lo que él contaba, pero no señalaba en cual, eso eran golpes, con mangueras, insultos, también le pegaban con la culata de los armamentos en las costillas; dice que la persona que le entregó esa información fue el mismo Sr. Velásquez, en las conversaciones que mantenían; consultada sobre cuáles eran las lesiones internas o enfermedades posteriores que tenía el Sr. Velásquez, expresa que la verdad él estaba en tratamiento médico, lo veían como 3 o 4 médicos, pero el empezó a tener dificultades para comer ciertos alimentos, corno cordero, y él tuvo que dejar todo lo que era grasa, aceite, fritura y llevar una dieta blanca, sin sal ni azúcar, a última hora si comía comida sólida, a los diez minutos lo vomitaba y de ahí sólo comenzó a tomar Ensure; indica que Sr. Velásquez tenía su propia estancia, al principio cuando estaba sano el realizaba actividades como supervisar la esquila, incluso él hacía almuerzo para sus trabajadores cuando el cocinero estaba enfermo, andaba mucho a caballo, manejaba. Cosas que después tuvo que dejar de hacer; consultada por cuál era la época en que el Sr. Velásquez estaba sano, dice que ella lo conoció en el año 1995 y en esa época él estaba más o menos, aún podía hacer esas actividades; afirma a consecuencia de los hechos referidos en la demanda, la demandante sufrió daño psicológico, ella es una mujer de 87 años es muy trabajadora, activa, pero hubo un época en que estuvo muy mal psicológicamente, ella no recurrió a ningún profesional, solo recibió el apoyo de sus hijos, le costó mucho superar esto, trata de no recordar esos episodios, porque le afecta mucho. Ella tuvo que vender todo lo que su esposo le dejó, en



cuanto al monto no lo podría calcular; indica que el daño psicológico de la demandante le consta porque ella la acompañaba, hubo un tiempo que dormía mucho, no quería comer, la llevaron al médico, su doctor de cabecera, el Dr. Araneda es quien la atiende hasta el día de hoy, está en constante supervisión. Ella también tiene problemas al corazón; señala que la época en que se encontró mal la Sra. Antinopai fue desde que comenzó don Miguel con su enfermedad de cáncer de próstata, ella lo cuidaba de día y de noche, ella dormía muy poco, porque él vomitaba de noche, ella lo acompañó durante todo ese proceso, también se fue con él a Viña del Mar, nunca lo dejó solo; cree que permanecieron en Viña del Mar, doña Olga Antinopai y el Sr. Velásquez, entre 4 a 6 meses, no está segura; el mismo Sr. Velásquez cubría los gastos de residencia y tratamiento con el fruto de su trabajo y de sus ahorros; indica que actualmente la Sra. Antinopai tiene una pensión vitalicia, le parece, y aún le queda algo de dinero de todo lo que se vendió, todo fue vendido y repartido; los gastos médicos de la Sra. Antinopai, los cubre ella misma; no recuerda el año específico en que contrajeron matrimonio doña Olga Antinopai y don Miguel Velásquez, pero sí estuvieron varios años, primero en una convivencia y después se casaron; no puede decir la fecha exacta en que se le diagnosticó cáncer al Sr. Velásquez, pero fue más o menos en el año 1997 o 1998.

SEXTO: Que, la demandada rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 28, acompañó: 1.- Copia simple de Oficio Ord DSGT n°4792/3492, de fecha 1 de octubre de 2021, del Instituto de Previsión Social; 2.- Copia simple de Oficio Ord DSGT n°4792/3113, de fecha 7 de septiembre de 2021, del Instituto de Previsión Social; 3.- Copia simple de Oficio 169/2021, de fecha 16 de septiembre de 2021, del V Juzgado Militar de Punta Arenas.

Que, en el folio 35, acompañó: Oficio DSGT N° 4792-3113 del Instituto de Previsión Social, de fecha 7 de septiembre de 2021; Oficio DSGT N° 4792-3492 del Instituto de Previsión Social, de fecha 1 de octubre de 2021; Oficio N° 169/2021 del V Juzgado militar de Punta Arenas, de fecha 16 de septiembre de 2021.

DECISIÓN

SÉPTIMO: Que, son hechos no controvertidos y, por ende, establecidos del pleito, los siguientes:

1.- Que Miguel Ángel Velásquez Guerrero, cónyuge de la demandante se desempeñaba como trabajador de la “Estancia Primavera”, y el 25 de septiembre de 1973, es secuestrado ilegalmente por una patrulla militar, siendo subido a un camión del Ejército de Chile, en el cual lo desnudan y es golpeado repetidamente con culatas de fusil, con manos y pies.

Al cabo de algunas horas de maltrato físico y emocional, los militares lo llevan a la casa de interrogación que instalaron en Cerro Sombrero, perteneciente a la Empresa Nacional del Petróleo, recinto que estaba a cargo del Ejército de Chile,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LTKYXFEBTSJ

siendo torturado con una “ceremonia” que denominaban “la alfombra”, que consistía en arrojarlo al suelo y con golpes de pies, pisotones y culatazos, siendo agredido por toda la guardia de turno, conformada por aproximadamente 8 personas, debido a la golpiza resulta con lesiones, sin que recibiera algún tipo de atención médica.

Luego, fue llevado a una “casa de detención”, donde es interrogado y torturado por tres días seguidos, que consistían en golpes de puños y pies en la cabeza, sumergirlo de cabeza en tambores metálicos llenos de agua con olor a fecas humanas. Además, lo colgaban por horas de los pies y le tiraban bombas lacrimógenas y agua, lo que hacía que todo su cuerpo sintiera el efecto de los químicos. Le aplicaron repetidas descargas eléctricas en los testículos y sienes, todo ello sucedía mientras estaba completamente desnudo. También fue inyectado repetidamente con una “droga de la verdad”.

a detención ocurre hasta fines de octubre de 1973, siendo informado por sus captores que su libertad sólo sería transitoria y lo volverían a buscar, estando obligado en el intertanto a firmar diariamente en la comisaría de carabineros de Cerro Sombrero, lo que dura por un periodo de 2 años y algunos meses.

2.- Que, don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, Cédula de Identidad N° 3.447.142-8, fue sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo constitutivo de un ilícito, para lo que nos convoca, de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal, los cuales fueron perpetrados al menos y concretamente, en la ciudad de Punta Arenas, desde 25 de septiembre de 1973 hasta fines de octubre del mismo año, a lo menos.

3.- Que, don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, se encuentra dentro de la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, bajo el número 25.824.

4.- Que, don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, como beneficio de reparación legal, recibió \$15.398.457 pesos, mediante el Instituto de Previsión Social.

5.- Que, la demandante, doña Olga Antinopai Sánchez, cónyuge de don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, atendida la calidad de este último de víctima de Prisión Política y Tortura, a septiembre de 2021, como beneficio de reparación legal, recibió \$14.413.584 pesos, mediante el Instituto de Previsión Social, con una pensión mensual de \$170.728 a esa fecha.

OCTAVO: Como se sabe, la prueba del daño de manera genérica es un requisito de la esencia de la responsabilidad civil, toda vez, que para que se origine la obligación de indemnizar perjuicios, la conducta ilícita debe, necesariamente, haber ocasionado perjuicios, con arreglo a artículo 1698 del Código Civil.



Analizar el daño moral, importa una cuestión prevalentemente personal y al pertenecer al fuero interno de las personas evidentemente su existencia íntima será tan individual como personas existan en el mundo, de modo, que resulta compleja su prueba, en efecto, reconociendo esta complejidad resulta necesario objetivar las probanzas al efecto, lo que nos lleva a ponderar en conformidad a lo establecido en tanto en el Código de Bello como el en Código Procedimiento Civil, aun así, los tribunales de instancia y superiores no logran estar contestes en un régimen de prueba de daño moral.

Así las cosas, en relación a la existencia del daño que padeció don Miguel Ángel Velásquez Guerrero, se desprende de la naturaleza de la agresión sufrida por éste, de la cual en manos de agentes del Estado, desde su privación de libertad, golpes, malos tratos e interrogatorios, con uso desmedido de la fuerza, y prácticas fuera del derecho, hasta la consecuencia directa que implicó afectación en contexto personal, social y familiar debiendo considerarse en este sentido su reconocimiento por parte del Estado como víctima, así como las reparaciones que, si bien no permiten ser entendidas como íntegras, sí complementan el ejercicio de la acción que se pretende en estos autos, al morigerar las consecuencias perniciosas del ilícito, al estar fundada en los mismos hechos.

Por su parte, la demandante, el acápite “ otros fundamentos de hecho fundantes del derecho a demandar daño moral por la demandante” sostiene que toda esa aflicción se entendió durante toda su vida sentimental con el señor Velásquez Guerrero y las consecuencias de la experiencia vivida, los temores, sobresaltos y sufrimientos instalados en el seno familiar le acompañaron hasta su deceso y se han proyectado hasta el día de hoy en un tiempo en que la nostalgia y el daño causado ya forma parte, indefectiblemente de su vida cotidiana.

En prueba de aquellas afirmaciones, rinde testimonial legalmente juramentada a folio 53, sin tacha, quien, interrogada sobre los puntos de prueba, en especial el N°3 y dando razón de sus dichos, reconoce que la demandante de 87 de años de edad, estuvo muy mal psicológicamente, sin recurrir a ningún apoyo profesional, sólo recibió apoyo de sus hijos.

Agrega en su declaración que le consta lo anterior, pues la testigo acompañaba a la demandante y hubo un tiempo que dormía mucho, no quería comer, la llevamos al médico de cabecera, precisando el mal estado, comenzó con la enfermedad de cáncer a la próstata de su cónyuge, ahora fallecido.

Lo anterior, sometido a la tasación legal, conforme al artículo N°384 N°1 y unido a la documental de folio 53, por el Instituto de Previsión Social, Oficio ORD. DSGT N° 4792-3492, de fecha 1 octubre de 2021 y por supuesto a lo asentado en considerando séptimo del fallo, constituyen una presunción judicial en relación con el artículo N°384 N°1 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de gravedad y



precisión suficientes sin prueba en contrario, conforme el artículo 426 del mismo Código.

Que tal declaración testimonial así valorada, no tan solo se utiliza como una forma de ratificar lo establecido, sino que ésta declara respecto a los efectos que en la esfera emocional e íntima del demandante extendido en el tiempo a partir de un hecho asentado en la causa en que su cónyuge fue víctima de tratos degradantes e inhumanos, conforme el considerando séptimo y la presunción judicial establecida, constituyen los presupuesto fácticos que la actora experimentó emociones daños en su fuero interno con repercusión en su esfera moral, que deviene en un daño extramatrimonial que debe ser resarcido.

En ese caso, dicha declaración no se refiere tan sólo al daño moral como se viene razonando, sino concretamente un cambio en las condiciones de vida de la víctima, que permite determinar, no sólo la procedencia, sino también el monto de la pretensión indemnizatoria, pues en dicha presunción convergen los efectos dañosos de la demandante y su cónyuge, así, el menoscabo directo y personalmente sufrido por demandante, que los fueron debidamente acreditados en la etapa procesal pertinente.

NOVENO: En cuanto, a la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por limitación de la justicia transicional y tal como lo afirma el demandado, se han efectuado por el Estado chileno múltiples esfuerzos, una vez finalizado el régimen autoritario, de compensación a todas aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos o a sus familiares directos por episodios ocurridos durante el período de la Dictadura Militar que gobernó nuestro país, que ha sido fijado por ley entre los años 1973 y 1990.

Amparados en esta lógica, es que se dictó la Ley N° 19.123, de 8 de febrero de 1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que establece una pensión mensual de reparación, en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

Normativa a la que se agregó la Ley 19.234 de 1993, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para transigir extrajudicialmente con relación a la jubilación de éstos en los casos que señala; la que dispuso en su artículo 8 en relación con su artículo 3, que son exonerados políticos los que hayan sido despedidos por causas que se hubieran motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como el hecho de figuración del exonerado en decretos, bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por alguna autoridad civil o militar, como activista



político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso, que hubieran sido privados de libertad, en cualquier forma, fuere en calidad de prisioneros, retenidos, detenidos, relegados o presos, en cárceles, prisiones, regimientos, lugares especialmente habilitados al efecto, o en su propio domicilio, sea que estos resulten ser coetáneos, o inmediatamente anteriores o posteriores a la exoneración, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta fue modificada por la Ley 19.582 y la Ley 19.881 estableció un plazo para acogerse a los beneficios allí concebidos.

Asimismo, en el marco del reconocimiento de violaciones de derechos humanos en Chile por parte de agentes del Estado durante la Dictadura Militar, se dictó la Ley 19.980 de noviembre de 2004, ampliando los beneficiarios y beneficios de leyes precedentes; y la Ley 19.992 de diciembre de 2004, que estableció beneficios de carácter médico y educacional y una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, así como su incompatibilidad con aquellas otorgadas en las leyes N° 19.234, 19.582 y 19.881, otorgando a estas personas la opción y a quienes la ejerzan el derecho a un bono. La ley 20.134 que concedió un bono extraordinario a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado, exonerados por motivos políticos en período que indica a quienes se les concedió pensión no contributiva conforme al inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234.

Tal normativa interna tiene prístina vinculación con lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en que los Estados Americanos signatarios, entre otros, reconocen un listado de derechos que estiman consubstanciales a la persona humana. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en Chile desde el año 1989.

Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas leyes de reparación; si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de derechos humanos o a sus familiares directos, estima este sentenciador que en modo alguno impide acceder ni es incompatible, con el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil ofensiva, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta, instando por la reparación efectiva de todo daño sufrido.



En efecto, la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que, conforme al análisis de las características de los beneficios que involucran sólo introduce un régimen de reparaciones asistenciales generales, no contiene en sus textos incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, y no es procedente suponer que se dictaron para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dijo, de formas distintas de reparación, y el que las asuma el Estado voluntariamente en su totalidad, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley.

En cuanto a la tesis sostenida en la defensa fiscal, respecto la reparación estatal que implica la necesidad de rechazar in limine las demandas que las víctimas puedan ejercer ante tribunales, no resultan suficientes, pues de acoger a tramitación las mismas no desincentiva los planes estatales, toda vez que es precisamente la legitimidad del control judicial la que permite resguardar los derechos fundamentales, de nuevo vinculado al acceso a la justicia en su amplia dimensión, así como controlar la integridad de las reparaciones y reafirma los derechos fundamentales como límite o barrera frente a lo que alguna vez –y particularmente en 1973- pudo construir un fin estatal.

En este orden de cosas, si bien no se puede tener las indemnizaciones otorgadas por ley al demandante como suficientes para una indemnización satisfactoria, lo cierto es que consta en la ya pre-citada Ley, las prestaciones a las que se dio acceso, las que en términos generales pueden constituir una buena señal en cuanto a que nuestro Estado pretende por tal vía reparar en parte el mal causado, y por otra, ofrecer garantías de no repetición, pero que indudablemente no alcanzan a dar por cumplida la obligación del Estado de reparación integral a las víctimas, reparación que por cierto fluye como simbólica y más aún, compatible pues el plan del vida del actor ya se ha transformado y sólo corresponde en esta instancia, la estimación de un monto que pueda considerarse como necesario para alcanzar los objetivos que pueda lograr una indemnización por daño moral, y de esta manera, rechazando la alegación planteada en esta parte, las mismas serán consideradas para efectos de la regulación como se indicará.

DÉCIMO: Que, en relación a la excepción de prescripción extintiva y subsidiaria de 5 años del artículo 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil, como ya se indicó en las consideraciones previas de esta sentencia, se reproducen los argumentos esgrimidos y se remite a ellos, sin perjuicio de enfatizar que no resulta aplicable esta institución de carácter civil, para efectos de denegar el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas de derechos humanos, es decir, a la demandante y su cónyuge, como los que se han establecido en esta sentencia, y que han sido perpetrados por agentes del Estado, de manera sistemática y fuera del derecho, conforme lo haya resuelto la doctrina, pero especialmente los Tribunales



Superiores de Justicia, así como la Corte IDH, institución que cede ante las normas de ius cogens, normas de derecho internacional que mandatan al estado a responder como parte del principio democrático de derecho.

En efecto, en similares casos atendida la especial naturaleza del ilícito cometido, el Máximo Tribunal ha venido sustentando una línea de razonamiento que este sentenciador comparte (roles 1424-2013, 11208-2015, 13170-2015, 17015-2015, 37993-2015), la cual enfatiza que tratándose de un delito de lesa humanidad en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no parece coherente entender que la acción civil indemnizatoria quede sujeta a las normas sobre prescripción consagradas en la ley civil interna, ya que ello contraría la preceptiva internacional sobre Derechos Humanos integrante del ordenamiento jurídico nacional en virtud del artículo 5° de la Carta Fundamental, que introduce el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos como consecuencia del acto ilícito, y se opone incluso a lo establecido por el propio derecho interno que en virtud de la Ley n°19.123, reconoció la existencia de los daños y concedió beneficios de índole pecuniario también a los familiares de aquellas víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, registrados en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Por consiguiente -se afirma- cualquier supuesta diferenciación entre ambas acciones y otorgamiento de un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Estriba lo anterior, la improcedencia de aplicar normas del Código Civil como derecho común supletorio a la responsabilidad derivada de crímenes como el de autos, posible de cometer con la activa colaboración del Estado, por cuanto dichas normas atienden a postulados y finalidades distintas a aquellas que emanan del Derecho Internacional, de modo que deberá integrarse la normativa con los principios generales del derecho respectivo, que reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos.

DÉCIMO PRIMERO: A mayor abundamiento, conviene tener presente que la acción deducida encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile que consagran el derecho a la reparación íntegra, los que el Estado está obligado a reconocer y proteger con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5° inciso segundo y 6° de la Carta Fundamental.

En esta línea argumentativa, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1.1 y 63.1) sujeta la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos (violaciones de derechos humanos) a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho



interno, acatando de este modo la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (artículo 27). Esta preceptiva de rango superior impone un límite y un deber de actuación a los poderes públicos y en especial a los tribunales nacionales, en tanto no pueden interpretar las reglas de derecho interno de un modo tal que deje sin aplicación los preceptos de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación íntegra del daño, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Conforme se viene razonando, no resultan atinentes las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios que contradicen la normativa internacional en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado de Chile.

DÉCIMO SEGUNDO: Finalmente debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también del artículo 6° de la Constitución Política de la República y 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, normas que -de acogerse la tesis del Fisco de Chile- quedarían sin aplicación.

La primera disposición, somete la acción de los órganos del Estado a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, declara la fuerza vinculante de los preceptos de la Constitución para sus titulares o integrantes como para toda persona, institución o grupo, y dispone que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. La segunda, establece que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad.

DÉCIMO TERCERO: Atendido lo anterior, en lo precedente, corresponde rechazar las excepciones de prescripción de las acciones civiles que se ejercitan en autos por aplicación de la preceptiva contenida en el Código Civil, por ser contrario a las reglas de Derecho Internacional a que queda sujeta la responsabilidad del Estado por la clase de ilícitos que se analizan.

DÉCIMO CUARTO: Que, en virtud de los hechos establecidos en el considerando séptimo de esta sentencia y en base la valoración de la prueba testimonial y no tachada consignada en el considerando octavo, quedaron asentados en el caso sub júdice los hechos que dieron origen al daño moral reclamado por la demandante, otorgando la conformidad al punto 3 de la interlocutoria de prueba, que consistía en la “Efectividad que la demandante, a consecuencia de los hechos referidos en la demanda, sufrió daños; en su caso, naturaleza y cuantía de los mismos.” y en definitiva, quedaron acreditados en el caso sub júdice los hechos



daños en que se funda la demanda, constituido por el actuar delictual en que han incurrido agentes del Estado de Chile.

Los perjuicios de índole moral, que a consecuencia de ello ha devenido en quien ha accionado civilmente, quedan -a su vez suficientemente asentados en razón de la prueba acompañada y que da cuenta de la carga psicológica y emocional que mantiene hasta el día de hoy la demandante con motivo de la detención ilegal, prisión política y torturas sufridas durante el 25 de septiembre de 1973 y hasta fines de octubre de 1973 de su cónyuge.

Con todo, es dable afirmar que los hechos en que incurrieron los agentes del Estado implican lesión a derechos extra patrimoniales de gran valor, entre los cuales aparece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, derechos que se encuentran cautelados constitucionalmente.

DÉCIMO QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y la entidad del daño moral sufrido, como también sus consecuencias psíquicas, familiares y sociales en la actora, y -por cierto- su persistencia en el tiempo, que de acuerdo a lo expresado tanto por las partes, no es posible ceñirse a criterios concretos y específicos que vayan unidos a una determinada cantidad de dinero, y que esta cantidad, pueda efectivamente resarcir las consecuencias perniciosas del ilícito, es que corresponde acceder a la pretensión indemnizatoria de autos, fijándose prudencialmente su monto en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para doña Olga Antinopai Sánchez.

En cuanto a la solicitud subsidiaria del Fisco de considerar para la regulación del daño, los pagos ya recibidos del estado, no puede ser atendida, por las mismas argumentaciones referidas en el considerando noveno de esta sentencia.

DÉCIMO SEXTO: Que, la restante prueba anotada en el motivo sexto de esta sentencia, en lo no considerado, en nada altera lo que se ha venido razonando y sólo se menciona para los fines procesales pertinentes.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en relación a las costas, considerando que la parte demandada no ha sido totalmente vencida, así como la naturaleza de la acción, y las acciones previas que ha desplegado el Estado para satisfacción de las víctimas, se eximirá del pago de las costas.

DÉCIMO OCTAVO: Para efectos de reajustes e intereses y concretar el principio de la integridad de la reparación del daño, las sumas que se condena pagar al demandado, por concepto de indemnización por daño moral, se reajustarán en la misma proporción en que varíe positivamente el Índice de Precios al Consumidor desde el mes anterior a la época en que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la época de la mora hasta el pago efectivo.

DÉCIMO NOVENO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.



Por estas consideraciones, y teniendo presente el derecho internacional de los derechos humanos; las Convenciones Internacionales sobre la materia, ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes; la Constitución Política de la Republica; nuestro Código Civil; Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.992; y demás normas pertinentes, SE DECLARA:

I. Que se rechazan las excepciones de pago íntegro y prescripción opuestas por el Fisco de Chile.

II. Que, se acoge la demanda deducida, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a la demandante, Olga Antinopai Sánchez, cédula de identidad número N° 3.577.470-K, a título de indemnización por daño moral, la suma de **\$40.000.000(cuarenta millones de pesos)**, más los reajustes e intereses desde que la sentencia queda firme.

III. Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-1232-2021.

DICTADA POR DON CÉSAR MILLANAO ANDAUR, JUEZ SUBROGANTE DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS.

a

b Certifico: que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Punta Arenas, 20 de mayo de 2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LTKYXFEBTSJ